

Partidos políticos y futuro: corrupción, transparencia y responsabilidad en la praxis política

José Vives Rego¹

Resumen: Ante la inquietud de la ciudadanía al constatar la cada vez más evidente corrupción política, se analizan dos situaciones contrapuestas: i) el origen y mecanismos de esa corrupción y ii) los posibles inconvenientes de un exceso de transparencia y responsabilidad política. Finalmente, y a la luz de estos planteamientos, se hacen una serie de reflexiones sobre el panorama inmediato de los partidos políticos.

Palabras clave: corrupción — transparencia — responsabilidad — partidos políticos.

Abstract: As a result of the concern among Spanish citizens caused by the evidence of political corruption, the paper offers: i) an explanation about the origins and mechanisms of corruption; ii) an analysis of the demands of transparency and of political responsibility and their inconvenients. Finally, the paper offers a series of critical reflections on the current situation of political parties.

Keywords: corruption — transparency — political responsibility — political parties

CORRUPCIÓN

Una inquietud de indudable actualidad es que la ciudadanía vislumbra que la buena gestión de los servicios públicos dista de ser una realidad dada la corrupción de la función pública y del sistema político. De entre los muchos aspectos vinculados a la corrupción política el que se manifiesta como más evidente, es que los partidos y los políticos se mantienen económicamente a partir de dinero oculto proveniente de instituciones financieras y grandes empresas. A esta corrupción debe añadirse que los partidos corresponden a la financiación ilegal y oculta con favores y concesiones a las entidades que les aportan financiación, obviamente a costa de los intereses públicos. Las consecuencias de esta doble corrupción son básicamente que cercenan las políticas de igualdad individual, empresarial e institucional y alientan el comportamiento corrupto en el resto de la sociedad.

Dicho de modo muy simple ¿cómo podemos confiar en un sistema público y por tanto en su eficacia, si los políticos que encabezan el sistema son corruptos e incapaces o simplemente no se manifiestan capaces de impedir esas prácticas? Ser demócrata, no se reduce al simple hecho de votar periódicamente, aunque sin lugar a dudas el votar con libertad y conocimiento constituye un hecho de importancia crucial. Ser demócrata y ciudadano moderno implica participar en la gestión pública. La exigencia de honestidad, por tanto, solo puede hacerse a través de la propia

¹ Universitat de Barcelona.

participación y auto-sometimiento como individuos privados al propio rigor que exigimos al sector público.

En los últimos años se observa que desde los *media* y una gran parte de la opinión pública, se describe una esquema social en el que por una lado hay el pueblo-víctima, virtuoso, homogéneo y denunciador que se contrapone a los cuadros institucionales que se presentan como corruptos e incompetentes a la hora de gestionar lo público y lo privado.² También se observa, que ese pueblo-virtuoso que es a la vez víctima, no da pasos para constituirse en estructuras organizadas que contribuyan a la resolución de sus problemas. Por otro lado, los que propugnan o describen esa dualidad social, no explican cómo puede ser que los corruptos cuadros gestores que sin lugar a dudas han surgido del pueblo-virtuoso, hayan dejado de serlo y que en ningún momento se cuestionan en qué medida ese pueblo víctima y a la vez virtuoso pueda ser o sea también corrupto, aunque eso sí de manera proporcional a sus posibilidades. Parece obvio que explicar la corrupción y la baja humana haciendo referencia únicamente a las instituciones y a los que ostentan cargos, es insuficiente.

LOS LÍMITES A LA TRANSPARENCIA Y A LAS RESPONSABILIDADES

Una de las aspiraciones y exigencias actuales más legítimas de la ciudadanía es demandar más transparencia, responsabilidad y honestidad en la praxis política. Estos planteamientos son legítimos y necesarios para una regeneración de la vida política tanto en España como en muchos otros países. En cualquier caso, esas exigencias constituyen la base para alcanzar una sociedad más progresista y justa. Pero dado que estamos viviendo una época de transición en la política contemporánea, se hace necesario analizar si existen límites a esa transparencia y cuales son.

Es conveniente por tanto analizar y esclarecer cuales son los límites a las exigencias de transparencia, responsabilidad y honestidad entendidas como ausencia o minimización de la corrupción. Lo primero que hay que decir es que un exceso de transparencia lleva a una inevitable reducción del número y flexibilidad de las opciones políticas. Por ejemplo, cuando se negocia la paz en temas de terrorismo, si hubiese total transparencia de las partes y cuando los entes sociales que respaldan a los representantes no quieren hacer concesiones, el proceso sería inviable. Normalmente los líderes entienden que ciertas concesiones para alcanzar la paz no son *a priori* aceptables por sus bases, pero pueden conducir y la experiencia demuestra que esas concesiones acaban conduciendo a la paz que es el objetivo común para todos los implicados. Algo similar sucede en las negociaciones entre empresa, sindicatos y estado.

Los excesos de transparencia hacen más difícil y compleja la deliberación y la organización de la lucha política. Por un lado, restringen la libertad de pensar y

² A parte de los numerosos artículos de la prensa española escritos en los 10 últimos años, una descripción y análisis de la corrupción de los partidos políticos en España se encuentra en el libro de Javier Pradera *Corrupción y política. Los costes de la democracia* de Galaxia Gutenberg, escrito en 1994 y publicado en el año 2014.

expresar libremente, puesto que el representante siente prevención e incluso tiene miedo a cometer errores que el público o el electorado valore erróneamente, incluso antes de que la propuesta y la actuación política manifiesten resultados. Por tanto, los excesos de transparencia no siempre favorecen una deliberación libre y profunda, haciendo por tanto más complicada la organización del trabajo político. También debe tenerse en cuenta que las demandas excesivas de transparencia a los gobernantes, no acostumbra a hacerse extensivas al resto de estamentos de la sociedad y de la población y si así se hiciese, muy probablemente se considerarían una intromisión en las libertades individuales y de la sociedad civil. Dicho de otro modo, debe dilucidarse cuando las exigencias de transparencia chocan con los derechos a la intimidad e intereses de entidades civiles e individuos. Es obvio que la exigencia de transparencia no tiene la misma “eticidad” cuando afecta a la gestión y a los bienes públicos, que cuando se exige a estamentos de menor rango o privados. Sin embargo, como la gestión pública siempre recae en personas individualizadas, con sus creencias, intereses, utilidades y derecho a la privacidad, establecer una frontera nítida en el individuo cuando se comporta como gestor público o cuando lo hace como ciudadano moderno, no es tarea fácil. Por ello, ante determinadas demandas de transparencia, hay motivos para pensar que descartando la ingenuidad del agente que las exige, quizás no respondan a demandas y lógicas progresistas en la política actual, a pesar de ser mediáticamente bien recibidas.

Cuando la exigencia de responsabilidad es excesiva y no compartida por los entes sociales que apoyan a los líderes, esos mismos líderes tienen más dificultades para asumir riesgos y por tanto es mucho más difícil alcanzar el éxito en las acciones y acuerdos políticos. Cuando hay exceso de transparencia y responsabilidad, es frecuente que los líderes más independientes y centrados no puedan actuar o su acción sea más difícil o menos eficiente. En tales casos, entran en la acción política los líderes más comprometidos con planteamientos políticos altamente ideologizados de su entorno, con la consecuencia de que hay más limitaciones para llegar a acuerdos amplios. Estas situaciones, pueden provocar la huida cuando no la desimplicación de los líderes más vocacionales o los más eficientes y profesionales, para dar cabida entonces otros que sean menos eficientes, o más ideologizados o corruptos en el sentido que están dispuestos a hacer cosas destinadas al interés de sus grupos y por tanto alejadas del bien común.

Otro elemento crucial es que un exceso de transparencia puede desviar la atención del público de las causas profundas y últimas de la acción política. Concretamente deben mencionarse dos situaciones. Una situación posible es cuando en aras de la transparencia se penaliza a un líder por ser responsable de las consecuencias negativas de decisiones políticas, que en ningún caso han sido intencionadas o previsibles. Otra situación se daría cuando la transparencia no puede esclarecer las diferencias entre los actos bien intencionados y el simple fracaso de los actos, más allá de que hayan sido o no bien intencionados.

Debemos por tanto asumir que, a partir de determinadas formas o niveles de transparencia, se pueden derivar riesgos para la seguridad del estado y la eficacia y flexibilidad de la gestión política en negociaciones como los acuerdos laborales, jurídicos, geopolíticos, terrorismo, etc.

LAS CLASES MEDIAS: ELEMENTO CENTRAL

Dado que la educación y el comportamiento social de las clases medias es substancialmente diferente al de las clases pobres, la expansión de la democracia pasa en gran medida por las clases medias. Sin embargo y pensando especialmente en las manifestaciones de los indignados en los diferentes países tanto desarrollados como en vías de desarrollo, el problema y el reto de las protestas sociales de las clases medias es el convertir esa protesta en actuación o incluso coalición política.

Hemos visto como las clases medias de los países desarrollados toman consciencia de su declive y de que su nivel de vida y bienestar posiblemente no será mejor que la generación precedente e incluso empiezan a vislumbrarse que serán menos buenos o claramente inferiores. Sin embargo, esos sentimientos o convicciones no van acompañados de actuaciones destinadas a constituir políticamente grupos operativos. Es decir, esas clases medias (y por ejemplo los denominados “indignados”) saben contra quién protestar y saben qué reclamar, pero son hasta la fecha incapaces de constituirse programáticamente. Quizás pueda contemplarse una excepción a estos asertos la aparición de “Podemos” a partir del 15-M. Sin embargo, aunque Podemos se articula a partir del 15-M, no podemos aseverar que represente las demandas programáticas de todo el movimiento 15-M. Sorprendentemente, otros grupos sociales claramente situados a la derecha de los planteamientos políticos como el *Tea Party* en Estados Unidos, fueron capaces de organizarse rápidamente, proponer candidatos, que obtuvieron tras las elecciones una posición política democrática y legítima, para influir en el debate y las decisiones políticas. En España tenemos el ejemplo reciente de “Ciudadanos” que es ideológicamente substancialmente diferente al *Tea Party*. Dicho de otro modo, existen ejemplos recientes de que el enfado (cuando no cólera) de la ciudadanía se transforma en asociaciones políticas, que actúan políticamente dentro de una estructura legitimada.

PARTIDOS Y FUTURO

El día a día de los medios de comunicación nos muestra a unos partidos políticos y a una clase política distantes de la sociedad y sus demandas. Muchos actores políticos todavía están centrados en una forma de hacer política jerarquizada en exceso y su pragmatismo se manifiesta en temas que están alejados de las preocupaciones de la mayoría social. No se perciben programas políticos coherentes e integrales que conviertan el bienestar de la sociedad en la tarea prioritaria, que vayan más allá de la retórica común e ineficaz que se expresan en los parlamentos. Es incluso posible, que ciertos sectores de la política y de la ciudadanía, consideren en su fuero interno que las cosas difícilmente podrían ir de otra manera.

Si asumimos que los bloques ideológicos se están diluyendo y los que todavía permanecen, no muestran por el momento que puedan aportar soluciones a los problemas actuales, los conflictos que conciernen a los estados deben redefinirse de otro modo. Tanto si los conflictos son internacionales o intraestatales e incluso

cuando los conflictos tienen lugar entre sectores empresariales, culturales o religiosos, en todos los casos hay al menos un lugar común: el ámbito económico. Con ello no queremos decir que no subyazcan en los conflictos actuales elementos religiosos, políticos, étnicos o sociales, pero en cualquier caso en esos conflictos siempre existe una disputa por el control de los recursos económicos, aunque solo sea para utilizarlos como un medio para alcanzar esos objetivos. Esta situación es altamente dinámica y cambiante, ya que los fenómenos de globalización y en especial la permanente evolución tecnocientífica, hacen que la disputa política experimente mutaciones que imposibilitan aplicar viejas recetas e incluso las nuevas tienen poca precisión o continuidad. Guste o no, la globalización y la incesante evolución tecnológica alteran continuamente los acuerdos socio-políticos y las dimensiones demográficas y geopolíticas de esos conflictos.³ Es decir, el análisis de las lealtades y congruencias o de los intereses nacionales en relación a las de los partidos políticos, grupos empresariales y directivos y líderes, difícilmente puede resolverse de manera pragmática a partir de las ideologías clásicas.

Al analizar desde la neurociencia la correlación entre nuestras creencias, decisiones y actitudes políticas con el sistema neurocerebral (aspecto etiquetado por el momento como “neuro-política”),⁴ constatamos dos cosas. La primera es que el comportamiento político del ciudadano, no puede explicarse únicamente como la consecuencia de una valoración (egoísta o no) de las opciones que presentan los candidatos de turno. Detrás de las decisiones políticas del individuo, hay siempre elementos inconscientes, respuestas automáticas, creencias e intuiciones. En muchos casos no somos ni siquiera capaces de decir el porqué de la decisión política que tomamos. La segunda es el importante papel de las emociones en las decisiones políticas de los ciudadanos, que no es ninguna sorpresa ya que ese elemento emocional se ha tratado en buena parte de la tradición filosófica. Finalmente, se observa a mi juicio, cierto parecido entre los actuales intentos de desregularizar el espacio político desde las izquierdas populistas (través de propuestas que no se identifican ni contienen programas o proyectos políticos organizados y razonados) con los bien conocidos intentos de la extrema derecha, que propugnan la privatización de lo público, con el consiguiente menoscabo de proyectos y realidades sociales.

Quizás estemos viviendo el ocaso de los grandes partidos dominantes, omnipresentes y oligárquicos. Pero de lo que no hay duda es que seguiremos necesitando los mediadores entre las aspiraciones de la ciudadanía y la frecuentemente difícil y poco generosa realidad. Me parece obvio, que partidos, sindicatos e instituciones locales, deben renovarse profundamente para poder afrontar los grandes retos actuales. La sustitución de los partidos actuales, a pesar de su “esclerosamiento”, no puede hacerse por agrupaciones ambiguas, anárquicas y amorfas de tecnó-

³ La lista de conflictos y tensiones es larguísima, pero los más aparentes son: i) el acceso a recursos básicos como el agua, la energía, los alimentos, las materias primas; ii) las competencias por las cuotas de mercado y las inversiones; iii) la dependencia de estados y empresas de los mercados financieros (sobre todo los deslocalizados); iv) la evasión fiscal y los paraísos fiscales; v) los movimientos dinerarios vinculados al terrorismo, al crimen y tráfico de drogas y armas; vi) el ciberespionaje y ciberterrorismo.

⁴ Cortina, A., 2012. *Neurofilosofía práctica*. Granada: Editorial Comares, pp. 79-80

cratas, populistas o ingenuos desconocedores de la compleja realidad. De ser así, el nuevo campo de batalla político, no solo sería peor que el actual, si no que se distanciaría irremisiblemente de las aspiraciones de la ciudadanía y de ser una realidad inherente a cada sociedad. En el decir de Kuant,⁵ «ha de ser posible instaurar un sistema común de tal suerte que todo el mundo tenga libertad de movimientos y de acción. De suprimir la libertad de oprimir a los demás sin necesidad por eso de estrangular o poner en un aprieto la libertad de todos. Y todo ello sin caer en sistemas opresivos totalitarios». Hoy por hoy, la tarea se percibe hercúlea y de gran velamen.

Desde pensadores como Alexis de Tocqueville, Woodrow Wilson y Max Weber entre otros y de manera especial en las últimas décadas, se han empezado a publicar estudios de rigor que muestran la necesidad y ventajas de establecer una clara frontera entre la esfera política y la administración pública. Es decir, entre el proceso de la toma de decisiones (de ámbito exclusivamente político) y el proceso de implementación de esas decisiones (ámbito administrativo y profesional). En términos más concretos, los gobiernos cuyas administraciones están menos politizadas, prestan sus servicios de manera más eficiente y presentan al mismo tiempo niveles de corrupción más bajos. Contrariamente, las administraciones fuertemente politizadas tienden a ser ineficaces y fomentan la corrupción a todos los niveles del estado tanto político como administrativo. Estos problemas están expuestos de forma magnífica en D.E Lewis (2008).⁶

El problema tiene varias facetas y todas ellas negativas socialmente hablando. Por un lado, que las personas nombradas políticamente sean menos capaces profesionalmente hablando que los funcionarios de carrera (por definición altamente profesionalizados salvo las lógicas excepciones) implica una menor eficiencia de la administración pública. Un segundo aspecto consecuencia del primero tiene que ver con el hecho de que estos nombramientos incentivan negativamente a los funcionarios altamente profesionalizados que por esas prácticas ven sus expectativas de progresar frustradas y carecen de incentivos para dar lo mejor de sus capacidades dejándoles como única alternativa el incorporarse a una disciplina política, incrementando de este modo el problema. Por otro lado, los designados políticamente no se van a sentir estimulados a hacer los esfuerzos necesarios para alcanzar la competencia de la que carecen comparativamente con la de los funcionarios que llevan preparándose durante años ya que son conscientes de que sus ascensos no son debidos a méritos profesionales. De este modo, cunde el desánimo entre los funcionarios independientes, se fomenta el amiguismo y las relaciones políticas interesadas y en definitiva el corporativismo político.

Es decir, cuando el funcionario independiente se pasa a la política y al político se le hace funcionario, las funciones se desdibujan, se hacen menos eficientes y las responsabilidades difícilmente pueden exigirse ni penalizarse o depurarse políticamente o profesionalmente. En estos momentos nos encontramos ante un proce-

⁵ Kuant, R. C., 1968. *La crítica hace al hombre*. Buenos Aires: Ediciones Carlos Lohlé, pp.96-108.

⁶ Lewis, D. E., 2008. *The politics of presidential appointment: political control and bureaucratic performance*, New Jersey: Princeton University Press.

so de excesiva politización al que debe ponerse límites, pues en caso contrario nos encontramos ante una politización de la administración pública pero también de una colonización de la política por funcionarios que ni tienen vocación ni formación para la política. De no hacerse, las consecuencias de esta excesiva politización serán que finalmente el sistema (tanto el político como la propia gestión pública) van a ser progresivamente inoperantes y el entramado de intereses y corporativismos lastrará cuando no anulará la capacidad de resolver problemas y retos de la sociedad.

La función social del poder es organizar y estabilizar la sociedad. Sin poder sobreviene el caos, la anarquía, el miedo y la barbarie y es la lucha de todos contra todos. Del mismo modo que una excesiva concentración de poder es dañina para la sociedad (dictaduras, monopolios, etc.) su ausencia puede dar paso a fanáticos, extremistas, o grupos cuyo objetivo no es el bien común si no el bien propio.⁷ Los mercados no son ni estables ni eficientes (en el sentido de generar riqueza social) y el reto es que los sistemas políticos sean capaces de corregir esos fallos del mercado. La ley más elemental de la teoría económica si se aspira a que la economía sea eficiente, es que la demanda iguale a la oferta. Pero hoy día tenemos un mundo con unas necesidades gigantescas no satisfechas y al mismo tiempo tenemos cantidad de recursos infrautilizados (trabajadores cualificados y maquinaria que no están produciendo en todo su potencial) o que solo una parte lo hace para un consumismo reiterativo, no sostenible y absolutamente injusto.⁸

La economía política está desplazando a la política social y a las dimensiones sociales del individuo cómo pueden ser la dignidad, la honestidad e incluso los valores éticos y estéticos. Es decir, la economía política al erigirse en valor omnipresente, prioritario y casi único se convierte en una “impolítica” en sí misma. La economía política y por ende la globalización económica son elementos inevitables hoy día, que tienen su sentido y deben atenderse. Pero no podemos permitir que en aras de esa realidad-necesidad desaparezcan los objetivos dirigidos a conseguir que el ser humano lo sea en sus aspectos más característicos y no acabemos siendo animales solo útiles para el sistema productivo.⁹

⁷ Naim, M., 2013. *El fin del poder*, Madrid: Debate, pp 37-45.

⁸ Stiglitz, J. E., 2014. *El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita*, Madrid: Prisa Ediciones, pp. 13-30.

⁹ Idea expresada por Hannah Arendt en el cap. I de *Vida activa y condición humana*. Cf. Arendt, H., 2009. *La condición humana*, Barcelona, Paidós, p. 21 y siguientes.